

Santiago, uno de julio de dos mil veintidós.

VISTOS:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, por sentencia de veintidós de febrero del año en curso, en causa RIT 662-2021, RUC 1710019560-7, condenó a Justiniano Quilo Soliz, a sufrir la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley 20.000, en relación al artículo 1 de la misma ley, cometido el día 7 de mayo de 2017, en la comuna de Huara. Se ordenó el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado y se le eximió del pago de las costas de la causa.

La sentencia fue impugnada de nulidad por la defensa del imputado Justiniano Quilo Soliz, recurso que se conoció en la audiencia pública el pasado uno de junio. Luego de la vista se citó a la lectura del fallo para el día de hoy, según consta del acta suscrita en esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

1º) Que por el recurso deducido se invoca en forma principal la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, consistente en la infracción sustancial, en cualquier etapa del procedimiento o en la sentencia, de derechos o garantías asegurados por la Constitución Política de la República o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, defecto que se configuraría en el caso en estudio, por la transgresión del debido proceso y la libertad ambulatoria, en relación a los artículos 19 N°7 y 19



Nº3 de la Constitución Política de la República, 8º de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 36 y 37 de la Convención de Viena, 84 y 173 del Código Procesal Penal, todo ello fruto de un control de identidad practicado fuera de las hipótesis legales, diligencia que arrojó como resultado el hallazgo de la evidencia que funda la decisión de condena. En lo referente a la alegación de ilegalidad del control de identidad, explica que el procedimiento que culminó con la detención de su representado, se inició por una denuncia anónima, de la cual no hubo registro, el denunciante no fue individualizado por los funcionarios policiales y tampoco declaró en el juicio, por lo que no existe una circunstancia fáctica objetiva y verificable en el marco del artículo 85 del Código Procesal Penal, para poder llevar a cabo la cuestionada diligencia.

Solicitó en la conclusión que se anule la sentencia y el juicio oral que la precede, además se disponga la remisión de los antecedentes al Tribunal no inhabilitado que corresponda, para la realización de un nuevo juicio oral, declarando se excluya toda la prueba del ente persecutor por haber sido obtenida con infracción de garantías constitucionales;

2º) Que, en subsidio, la defensa esgrimió como causal del recurso de nulidad, la contemplada en el artículo 374 e) del Código Procesal Penal, esto es, *“cuando, en la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letras c), d) o e)”*, en relación con el artículo 297 del mismo cuerpo legal, por haber infringido el principio de la lógica, en específico, la regla de la razón suficiente.

Desarrollando los motivos de su agravio, esgrime que la motivación de la sentencia condenatoria impone al tribunal indicar los medios de prueba, luego valorarlos de acuerdo a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados y, por último,



señalar la conclusión de la valoración, esto es, los hechos o circunstancias que se tuvieron por probados. De lo anterior colige que la valoración del tribunal *a quo* debe reflejarse en la sentencia mediante una secuencia configurada por dos momentos: el primero de carácter descriptivo, donde se indica el contenido del medio de prueba, y el segundo de carácter crítico, evaluativo del medio de prueba. De este modo -prosigue su narración- si se omite alguno de ellos, la sentencia resulta inmotivada y, por tanto, nula.

En su opinión, los sentenciadores enunciaron la totalidad de la prueba ofrecida, para luego valorarla, sin ponderar el contenido de la declaración de los testigos que reconocieron no haber observado a su representado. Reprocha que las conclusiones del tribunal se fundan únicamente en la declaración de dos testigos de oídas de los funcionarios que participaron de la fiscalización y supuesta huida del sentenciado, sin explicar cómo la documentación que les fue exhibida les permitió reconocer a una persona que ellos nunca vieron.

Termina solicitando se acoja la causal de nulidad invocada, se invalide la sentencia definitiva y se ordene la remisión de los autos a un Tribunal no inhabilitado para la realización de un nuevo juicio oral;

3°) Que como segunda causal subsidiaria, la defensa de Justiniano Quilo Soliz, invocó la de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, por cuanto, en el pronunciamiento de la sentencia, se ha hecho una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, al no reconocerle a su representado la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, imponiéndole una pena superior a la que legalmente correspondía, considerando que le beneficia la



minorante del artículo 11 N°6 del Código Penal y con ello se ha privado de toda posibilidad de reinserción social mediante la Ley 18.216.

Para argumentar, efectúa una comparación entre lo declarado por el sentenciado y aquellos hechos que se dieron por probados, colocando el énfasis en una evidente similitud en su elemento esencial, lo que afirma necesariamente alivianó la carga procesal del Ministerio Público.

Expone que la colaboración puede ser prestada en cualquier momento del procedimiento, la que requiere únicamente la entrega de todos los antecedentes e información que poseen los imputados, sin que sea exigible resultados concretos, pues sólo debe ser útil para que los sentenciadores formen su convicción sobre todo o parte de la acusación fiscal, presupuestos que según el recurrente, se cumplieron en la especie.

Termina solicitando que se invalide sólo la sentencia definitiva, se dicte una de reemplazo que reconozca al acusado las circunstancias atenuantes del artículo 11, numerales 6 y 9 del Código Penal y como consecuencia de lo anterior se le condene a la sanción de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, aplicando a Justiniano Quilo Soliz, la pena sustitutiva contemplada por el artículo 34 de la Ley 18.216, esto es, la expulsión del territorio nacional;

4º) Que para un adecuado entendimiento de lo que debe resolverse es conveniente recordar que los hechos que se han tenido por demostrados en el considerando décimo de la sentencia recurrida son los siguientes: “El día 07 de mayo del año 2017, aproximadamente a las 02:30 horas, a la altura del kilómetro 1839 de la ruta 5 Norte, en la comuna de Huara, Justiniano Quilo Soliz, quien conducía la camioneta de su propiedad, placa patente única GRKZ.45, fue sorprendido, por personal de Carabineros de Chile,



transportando en ella, a fin de traficar, 90 paquetes contenedores de 90 kilos y 380.6 gramos netos de cocaína; dándose Quilo Soliz a la fuga a pie, no obstante haber entregado momentos antes a la policía la documentación respectiva”;

5°) Que por la causal principal expuesta, la defensa de Justiniano Quilo Soliz, señala que las infracciones denunciadas se habrían producido debido a que el control de identidad practicado al imputado, su posterior detención y recolección de evidencia incriminatoria, fueron ejecutadas fuera del ámbito de las atribuciones de la policía que intervino, infringiendo con ello el debido proceso, en su vertiente de legalidad de los actos del procedimiento, así como la libertad personal;

6°) Que a fin de resolver sobre la pretendida vulneración de garantías constitucionales, cabe acudir a las circunstancias en que se produjo el control de identidad del acusado y luego a las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, a efectos de poder determinar si éstas han sido transgredidas y, luego de ello, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales del acusado Quilo Soliz;

7°) Que en relación a los cuestionamientos que se formulan en el recurso, esta Corte Suprema ya ha señalado en sentencias dictadas previamente, que el Código Procesal Penal regula a lo largo de su normativa las funciones de la policía en relación a la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación. Tal regulación, en todo caso, contempla como regla general que su actuación se encuentra sujeta a la dirección y responsabilidad de los representantes del Ministerio Público o de los jueces (Artículo 80 del Código Procesal Penal).



Es así como el artículo 83 del código aludido establece expresamente el marco regulatorio de la actuación policial sin orden previa o instrucción particular de los fiscales permitiendo su gestión autónoma para prestar auxilio a la víctima (letra a); practicar la detención en casos de flagrancia conforme a la ley (letra b); resguardar el sitio del suceso con el objeto de facilitar la intervención de personal experto de la policía, impedir la alteración o eliminación de rastros o vestigios del hecho, etcétera,(letra c); identificar testigos y consignar las declaraciones que ellos presten voluntariamente, tratándose de los casos de las letras b) y c) citadas (letra d); recibir las denuncias del público (letra e) y efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales (letra f). Sólo en las condiciones que establece la letra c) recién citada, el legislador autoriza a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile a efectuar diligencias de investigación.

A su vez, los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal regulan el procedimiento de control de identidad, estableciendo la facultad de los funcionarios policiales para solicitar la identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales, en los casos fundados en que estimen que exista algún indicio de que aquella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; en el caso que la persona se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad; facultando para el registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, procediendo a su detención, sin necesidad de orden judicial, de quienes se sorprenda a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130 -que describe lo que



debe entenderse por situación de flagrancia- así como de quienes, al momento del cotejo, registren orden de aprehensión pendiente.

8°) Que, por otra parte, es necesario tener presente que la institución de Carabineros de Chile tiene dos funciones: una, la prevención de la comisión de delitos en resguardo del orden público y la seguridad pública interior, y la otra le otorga el carácter de organismo auxiliar del Ministerio Público en la investigación de delitos. El control de identidad comprende ambos componentes de la actividad policial, pues, por una parte usualmente esta diligencia sólo importa acciones de prevención, de las que pueden derivar “indicios” que obligan a la Policía a reaccionar ante la probable comisión de un ilícito mediante acciones autónomas de investigación. Sin embargo, tanto los principios y directrices generales del proceso penal como la regulación específica del control de identidad llevan inequívocamente a darle un sentido limitado a tal actuación, por una parte, por afectar o poder afectar garantías constitucionales de los ciudadanos, y por otra, por tener un objetivo preciso, como es obtener la identidad de los sujetos que se encuentran en la situación prevista en la norma. En ese entendido, y teniendo en consideración que se trata de una facultad autónoma de la policía, resulta claro que puede llevarse a cabo solamente cuando se presentan las precisas circunstancias contenidas en el texto legal ya citado;

9°) Que en relación al contexto fáctico previo al control de identidad de Justiniano Quilo Soliz, es un hecho establecido en la sentencia que el día 7 de mayo de 2017, pasada la medianoche, un sujeto que no se individualizó llamó a la guardia de la Tenencia de Huara indicando que desde la localidad de Sibaya descendía una camioneta blanca, modelo Porter, transportando verduras y que venía cargada con droga. Producto de esa información,



funcionarios que se encontraban de servicio de población concurrieron a la ruta 5 norte, verificando que en la intersección de Huara con Colchane se desplazaba un vehículo que cumplía con las características que les habían sido proporcionadas, lo que motivó que se le practicara un control de tránsito -lo que se enmarca precisamente en la mencionada función de prevención de la comisión de delitos en resguardo del orden público- el conductor, luego de entregar la documentación del móvil y su licencia de conducir de Bolivia, descendió y se dio a la fuga a pie. Producto de lo anterior, los policías revisaron la camioneta, encontrando en el pick up, tres bolsas de basura con paquetes de cocaína.

Por ello, el supuesto sobre el cual descansa el primer acápite de la causal principal, resulta difícil de admitir, en cuanto se sostienen alegaciones de ilegalidad que no concurren en la especie.

En efecto, el control efectuado tuvo como justificación las circunstancias referidas en el motivo noveno de la sentencia recurrida que se consideraron suficientes para realizar el control de identidad que culminó con la incautación de la sustancia ilícita y posterior detención del acusado.

Para concluir en tal sentido, no debe olvidarse que Carabineros se encontraba facultado conforme a la Ley de Tránsito para controlar el vehículo, fiscalización vial que dadas las circunstancias ya descritas, constituía un antecedente suficiente para validar el uso de la norma del artículo 85 del Código Procesal Penal;

10°) Que en cuanto a la supuesta omisión de asiento de la llamada anónima, cabe tener en consideración que ella fue registrada en el informe policial, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del Código Procesal Penal, conforme lo establecieron los sentenciadores en el



fundamento décimo tercero, quienes desestimaron los reproches de la defensa, atendido que “conforme indicaron los policías que depusieron en estrados, están debidamente consignadas en el parte policial, por lo que, contrariamente a lo expuesto por el letrado del acusado, si existió un registro de las mismas, al punto que fueron conocidas por la defensa, que es precisamente el objetivo de la obligación referida”.

Que así las cosas, cabe entender que se ajustan a derecho la actuación policial y la del órgano persecutor, si las constancias fueron incorporadas en los respectivos registros, garantizando con ello la fidelidad de la información y el acceso a la misma, y con ello, en último término, el derecho a defensa;

11°) Que tal como ha aclarado esta Corte, el carácter anónimo de una denuncia no deslegitima la misma como fundamento de las actuaciones policiales a que ella da origen, si se trata de *“una denuncia que aunque anónima, estaba revestida de seriedad para habilitar a la realización de las primeras pesquisas de investigación por los funcionarios policiales”* (SSCS Rol N° 65.303-16 de 27 de octubre de 2016, Rol N° 145-17 de 28 de febrero de 2017 y Rol N° 7892-20 de 24 de abril de 2020), tal como se observa en el caso *sub lite*, donde las precisas características del automóvil en que se desplazaba el individuo denunciado y la trayectoria que llevaba, coincidían con las indicadas por el denunciante, que fue ubicado en la vía señalada, en el interior del vehículo que indicaba en su llamado y que existe un registro de aquella denuncia anónima;

12°) Que, de esta manera, queda desprovista de sustento la impugnación que descansa en el cuestionamiento de la legalidad del control de identidad practicado al acusado Justiniano Quilo Soliz al resultar suficientemente justificado el proceder policial sobre la base de los elementos



ponderados, por lo que no se conculcaron las garantías consagradas en el número 3° inciso sexto y 7° del artículo 19 de la Carta Fundamental, al ceñirse los funcionarios policiales a la normativa legal que los rige.

En conclusión, las actuaciones en análisis han sido efectuadas dentro del marco de la legalidad y por ello no han sido infringidas la garantías constitucionales del debido proceso y la libertad personal en perjuicio del acusado, ya que las pruebas obtenidas en tales actuaciones dieron cuenta de la comisión de un hecho ilícito, las que han podido ser válidamente incorporadas en juicio y valoradas positivamente por los sentenciadores para fundar la decisión de condena, lo que lleva al rechazo de la causal del recurso deducido por la defensa de Justiniano Quilo Soliz;

13°) Que en lo tocante al primer motivo de nulidad subsidiario explicitado a través de la proposición de la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal en armonía con el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo de leyes, cabe reiterar que ella se refiere a la omisión, en la sentencia, de alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, indicando que ello ocurre en relación a los elementos que la letra c) de esta última disposición ordena observar, esto es: *“La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y la valoración de los medios de prueba que fundamentare dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”*. A su vez, esta última norma prescribe *“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiese*



desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”.

En relación a esta causal la defensa reprocha que el veredicto impugnado se funda únicamente en la declaración de dos testigos de oídas de los funcionarios que participaron de la fiscalización y supuesta huida del sentenciado, sin que se explique cómo la documentación que les fue exhibida les permitió reconocer a la persona que ellos nunca vieron, infringiéndose así, el principio lógico de la razón suficiente.

Respecto de lo anterior, debe aclararse que la señalada omisión o ausencia no es tal, lo que se deduce de la sola lectura del fallo impugnado, de la que queda de manifiesto que la disconformidad real del recurrente está circunscrita a la valoración efectuada por el tribunal, la que no comparte. En efecto, lo anterior se aprecia del motivo décimo tercero en donde el fallo reproduce los razonamientos que se tuvieron en consideración para llegar a las conclusiones que allí mismo se consigan. Así, se analizó -contrariamente a lo expresado por el recurrente-, que “lo cierto es que los dos policías que depusieron en estrados se entrevistaron con aquellos que fiscalizaron al acusado cuando conducía el móvil transportando la droga, y les dijeron que entregó su licencia de conducir boliviana, apareciendo en ella la fotografía, refiriéndoles que era él, precisamente, quien conducía el móvil y es en virtud de ello que lo reconocen en estrados. A ello se suma un indicio, cual es que el



móvil en el cual se transportaba la droga, estaba inscrito a su nombre. Como se aprecia, no hay asomo de duda, por la contundencia y coherencia de la prueba de cargo, que es precisamente el acusado quien conducía el día de los hechos el vehículo transportando la droga, lo que, además, éste mismo corroboró al inicio del juicio oral.”;

14°) Que es necesario recordar que en un recurso como el de la especie, no ha sido dada a esta Corte la facultad de realizar una nueva ponderación de los elementos de prueba vertidos en el juicio oral, puesto que ello atenta contra el principio de inmediación y supera los límites de la nulidad. Por el contrario, la argumentación del impugnante se dirige en este sentido, por cuanto cuestiona la prueba producida por el ente persecutor, mediante el análisis de pasajes aislados, sin atacar -como supone la causal de nulidad en examen- el razonamiento del fallo que plasma el análisis global de la prueba rendida, en cuanto éste debe ajustarse a las reglas de la sana crítica, respetando las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados.

Por lo anterior, la impugnación de la sentencia fundada en la causal en análisis no dice relación con las conclusiones a que han arribado los sentenciadores al apreciar la prueba producida en el juicio oral, del momento que en ese aspecto gozan de libertad; con la limitación de que al valorarla no se aparten de los principios, máximas y conocimientos arriba señalados, a fin de fundamentar debidamente el fallo, para así controlar su razonabilidad. Sigue de ello que lo que sí es revisable por este medio de impugnación es la estructura racional del juicio o discurso valorativo sobre la prueba desde la perspectiva antes enunciada. En otras palabras, sólo es posible estimar el



recurso por esta causal si el tribunal a-quo determina su convicción sobre la base criterios manifiestamente arbitrarios o carentes de racionalidad.

Por ello, la circunstancia de no compartir el recurrente las conclusiones del tribunal en cuanto a la fundamentación, es decir, la valoración de la prueba producida, no supone automáticamente su impugnación por esta vía, en donde se ha denunciado la falta o ausencia de análisis completo de la prueba rendida y de los argumentos de la defensa, extremos que no concurren pues quedó demostrado que las pruebas y cuestionamientos formulados en torno a ella fueron efectivamente considerados y valorados, sin contradecir aquellos parámetros;

15°) Que, sobre la segunda causal subsidiaria del arbitrio en examen, por la cual reprocha que no se reconociera a su representado la minorante del artículo 11 N°9 del Código Penal, no obstante que –en su concepto- se reunían todos los requisitos para ello, conviene recordar que los jueces del tribunal oral en el fundamento décimo quinto rechazaron su concurrencia pues “si bien declaró en juicio, no proporcionó antecedentes relevantes tendientes a esclarecer los hechos, limitándose a confirmar su autoría, siendo ello establecido en el juicio oral con la prueba de cargo y, durante la investigación, con los antecedentes recopilados que derivaron, incluso, en que se librase una orden de detención en su contra. En este sentido, la referida actividad de parte del sentenciado, relativa a su declaración admitiendo su participación en el delito, no implica necesariamente la configuración de la minorante, desde que aquella contribución debe ser sustancial, es decir, que de manera importante ayude a la aclaración del delito, conclusión a la que se arriba considerando razones de orden histórico” .



Acto seguido señalaron que “en el caso de la atenuante de responsabilidad del artículo 11 N°9 del Código Penal, la colaboración sustancial que exige la norma debe necesariamente traducirse en una acción o declaración del imputado que tienda a proporcionar elementos que contribuyan o agilicen la labor del investigador, o que faciliten de algún modo la consecución de los fines del proceso. Que la colaboración sea sustancial nada tiene que ver con la exclusividad de los antecedentes probatorios aportados por el imputado, sino con que aclare los hechos investigados que han sido base de la acusación fiscal” (Corte Suprema, causa Rol N°3909-2009, de 15 de septiembre de 2009).

Producto de lo anterior, el tribunal concluyó que “en este caso, la colaboración de Quilo Soliz carece de sustancia para estimar concurrente la minorante en cuestión, ya que fue, como se apuntó, la prueba de cargo la que estableció su autoría en el crimen, y tampoco ha sido permanente, ya que incluso el día de los hechos, al ser controlado por la policía, huyó, dándose a la fuga, por lo que malamente podría estimarse que ayuda y colabora a aclarar lo ocurrido, quien con sus acciones obstaculiza tal labor”;

16°) Que, así las cosas, para desechar la causal de nulidad en examen, basta señalar que, como ha resuelto uniformemente esta Corte en relación a la denuncia de infracción del artículo 11 N° 9 del Código Penal, ponderar y dictaminar si la colaboración prestada por el acusado puede o no calificarse de sustancial para el esclarecimiento de los hechos investigados, es una decisión privativa de los jueces de la instancia, ya que sólo ellos pueden sopesar si la actividad desarrollada por los inculpados a lo largo del procedimiento, a la luz del cúmulo de evidencia reunida en el mismo, contribuyó o no a la labor jurisdiccional de esclarecimiento de los acontecimientos enjuiciados, labor que



no puede desarrollarse en esta sede de nulidad pues implicaría una nueva apreciación y valoración de todos los elementos que llevaron a los jueces de la instancia a la conclusión discutida por el recurso (entre otras, SCS N°s 24.887-2014, de 29 de diciembre de 2014; 37.024-2015, de 10 de marzo de 2016; 16.919-2018, de 13 de septiembre de 2018, 22.180 de 7 de febrero de 2022 y N° 42806-21 de 15 de marzo de 2022).

No es posible, por ello, analizar mediante este arbitrio y por la causal que se esgrime, la concurrencia de la atenuante en comento, motivo por el cual también será desestimada;

17°) Que en consecuencia y de todo lo analizado se concluye que los Jueces del Tribunal Oral al dictar la sentencia impugnada han cumplido a cabalidad con las normas legales que rigen la materia, sin que se advierta en ello algún vicio de los que invoca el recurrente, por lo que se desestimaré el recurso por las tres causales esgrimidas.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373, 374 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por el abogado don Daniel Huerta González, en representación del sentenciado Justiniano Quilo Soliz, contra la sentencia de veintidós de febrero del año en curso, y el juicio oral que le precedió, en los antecedentes RUC 1710019560-7, RIT 662-2021, del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique, los que, en consecuencia, no son nulos.

Se previene que el Ministro señor Llanos concurre al rechazo de la primera causal de nulidad esgrimida (esto es, la prevista en el Art. 373 letra a) del Código Procesal Penal) teniendo para ello únicamente presente:



a) Que la existencia de la denuncia anónima es un hecho asentado en la sentencia del grado, y que en consecuencia no puede ser objeto de cuestionamiento por la vía de la presente causal;

b) Que sin embargo, a juicio de este previniente, ella por sí sola no puede constituir un indicio para proceder al control de identidad que establece el Art. 85 del Código Procesal del Ramo, por cuanto resulta claro que -como toda denuncia- debe reunir ciertas exigencias formales previstas en los Arts. 173 y 174, ambos del mismo estatuto; en especial, la individualización del denunciante y si fuere verbal -como habría acontecido en la especie-, el levantamiento de un registro firmado por aquel y por el funcionario que la recibiere. Estas formalidades no son inocuas, puesto que su fin es dar seriedad a la imputación y hacer responsable a quien la formule, a fin de evitar denuncias infundadas que pudieren dar origen a persecuciones penales indiscriminadas con ánimo de venganza o con otros deleznales fines, afectando derechos constitucionales del afectado. Es por ello que “La denuncia anónima de un delito perseguible de oficio debe investigarse al menos para determinar la efectividad de los hechos denunciados y la identidad del denunciante.” (Horvitz y López, “Derecho Procesal Penal Chileno”, tomo I, pag.475). Luego, tal investigación debe ser dirigida en tal caso por el Ministerio Público y no en forma autónoma por las policías;

c) Que sin embargo, tal denuncia, aun cuando no cumpliera las condiciones antes expresadas -como también aconteció en el caso *sub iudice*-, si contiene ciertos caracteres de precisión sobre el hecho que se denuncia y su presunto autor, puede constituir, en conjunto con otros elementos objetivos, el indicio que faculta el control de identidad antes referido y permitir la actuación autónoma policial a que se refiere el referido Art.85, sin instrucción del fiscal, y



para realizar actuaciones intrusivas o vulneradoras de derechos, sin consentimiento del afectado o del juez de garantía;

d) Que en el caso de autos, entonces, la existencia de la denuncia imperfecta –en cuanto anónima, aunque con ciertos caracteres de precisión mínimos-, conjuntamente con la circunstancia - establecida también como hecho en la sentencia- de haberse dado a la fuga el imputado cuando era sometido a un control de tránsito por los policías aprehensores, constituyen el indicio suficiente de la perpetración de un delito para proceder conforme a la regla de la citada disposición, facultando a los policías para proceder al registro del vehículo en que se movilizaba el encartado –y que abandonó al huir-; de tal modo que la evidencia incautada se obtuvo en forma lícita, al procederse dentro del marco legal; no existiendo, en consecuencia, vulneración de los derechos constitucionales que invoca el recurrente.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Rol N° 7874-22

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorari G. No firma el Ministro Sr. Llanos y la Abogada Integrante Sra. Tavorari, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.





En Santiago, a uno de julio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

